



# GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXVI - Nº 16

Bogotá, D. C., miércoles, 25 de enero de 2017

EDICIÓN DE 58 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO  
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO  
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO  
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA  
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

## CÁMARA DE REPRESENTANTES

### CARTAS DE COMENTARIOS

#### CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

#### SOBRE EL TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 067 DE 2016 CÁMARA

*por medio de la cual se adiciona la Ley 1530  
de 2012 y se dictan otras disposiciones.*

1.1. Oficina Asesora de Jurídica

Bogotá, D.C

Honorables Representantes

JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA

JOSÉ IGNACIO MESA BETANCURT

Comisión Segunda Constitucional Permanente

Congreso de la República

Bogotá, D. C.

**Asunto: Comentarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el texto aprobado en primer debate al Proyecto de ley número 067 de 2016 Cámara, por medio de la cual se adiciona la Ley 1530 de 2012 y se dictan otras disposiciones.**

Respetados Congresistas:

De manera atenta me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el texto aprobado al proyecto de ley del asunto, en los siguientes términos:

El proyecto de ley tiene como objetivo modificar el artículo 30 de la Ley 1530 de 2012<sup>1</sup>, adicionando un nuevo párrafo que ordena destinar dentro de los proyectos de inversión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), un 10% para el sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector defensa.

Al respecto el artículo 1° de la iniciativa establece:

**“Artículo 1°.** El artículo 30 de la Ley 1530 de 2012, quedará así:

**Artículo 30.** Programas y proyectos. Los programas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, municipios y distritos que se financian con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se definen, viabilizan y aprueban por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión a que se refiere el tercer inciso del párrafo 2° del artículo 361 de la Constitución Política.

(...)

**Parágrafo 3°.** En todo caso, dentro de los proyectos de inversión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se destinará un diez por ciento (10%) para el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Defensa, con el fin de ejecutarse a través de proyectos de investigación, desarrollo e innovación para apoyar la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, la seguridad y la defensa de la soberanía nacional, siempre que tengan uso dual hacia el ámbito civil y con

1 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

*impacto regional y nacional. Los proyectos serán presentados ante el OCAD por parte del Ministerio de Defensa Nacional y el ente territorial correspondiente”.*

Frente a lo anterior, se precisa que la modificación es inconstitucional por ser incompatible con el marco jurídico sobre el cual se soporta el funcionamiento de los fondos del Sistema General de Regalías (SGR), teniendo en cuenta que el Acto Legislativo número 05 de 2011<sup>2</sup> modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, creando, entre otros, el FCTI, asignándole un porcentaje de los ingresos del SGR y estableciendo que los programas y proyectos a ser financiados deben ser definidos por un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

A su vez, la Ley 1530 de 2012 define la distribución de los recursos entre entidades territoriales, mas no fija porcentajes o montos por sectores, pues en cumplimiento del mandato Constitucional, los programas y proyectos de inversión son los determinados en los Planes de Desarrollo Nacionales y Territoriales y las prioridades de financiación de proyectos con cargo a estos recursos son de competencia exclusiva de los OCAD.

De otra parte, frente a la propuesta de que los proyectos sean presentados ante el OCAD por parte del Ministerio de Defensa Nacional y el ente territorial, es preciso señalar que el artículo 26 de la Ley 1744 de 2014<sup>3</sup> faculta a cualquier entidad del orden nacional y los centros de investigación y desarrollo tecnológico de carácter público reconocidos por Colciencias, para presentar proyectos susceptibles a ser financiados con cargo a los recursos del FCTI.

Por otro lado, es preciso poner a consideración la inconveniencia de la iniciativa, ya que con ella se estaría produciendo una inflexibilidad en el presupuesto del FCTI. En el mismo sentido, de aprobarse el proyecto de ley se puede generar que en el futuro se establezcan otros porcentajes a favor de estos sectores, lo cual desdibujaría la esencia del actual régimen de regalías.

Finalmente, es importante indicar que de acuerdo con el artículo 360 de la Carta Política, la ley que regula el Sistema General de Regalías es de iniciativa privativa del Ejecutivo, razón por

<sup>2</sup> *por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.*

<sup>3</sup> *por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.*

la cual, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cualquier propuesta al respecto, modificación o adición requiere el aval del Gobierno nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Cartera considera que en la actualidad la legislación vigente, la cual se ajusta al ordenamiento jurídico superior, suple las necesidades y preocupaciones que cimientan la iniciativa, a través de la formulación y presentación de los proyectos respectivos a consideración del OCAD del FCTI, por lo que resulta innecesaria la propuesta normativa, además de las razones expuestas del orden constitucional.

En razón de lo expuesto, esta Cartera se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley del asunto y, en consecuencia, respetuosamente, solicita la posibilidad del archivo de la iniciativa, no sin antes manifestarle muy atentamente la voluntad de colaborar con la actividad legislativa en términos de responsabilidad fiscal vigente.

Cordialmente,



MARÍA XIMENA CADENA ORDÓNEZ  
Viceministra General  
GRDGPDA  
JALDINGCALOV  
UJ-280818

C. Cop. H. R. Rodrigo Lara Restrepo - Autor  
H. R. Carlos Abraham Jiménez López - Autor  
H. R. Jorge Enrique Roza Rodríguez - Autor  
H. R. Carlos Abraham Jiménez López - Autor

Dr. Benjamín Niño Florez, Secretario del Comisión Segunda de la Cámara de Representantes  
Dr. Jorge Humberto Mantilla Serrano, Secretario de la Cámara de Representantes

\* \* \*

### **CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 129 DE 2016 CÁMARA**

*por medio de la cual se modifican los artículos 1° y 2° en sus numerales 1.2, 2.1 y 2.3 de la Ley 14 de 1990, en la cual se establece la distinción “Reservista de Honor”, y se dictan otras disposiciones.*

Doctor

MIGUEL ÁNGEL PINTO

Presidente de la Cámara de Representantes

Capitolio Nacional

Bogotá, D.C.

**Referencia: Concepto al Proyecto de ley número 129 de 2016 Cámara**

Respetado doctor Pinto:

Adjunto remito el concepto del Ministerio de Educación Nacional sobre el **Proyecto de ley número 129 de 2016 Cámara**, por medio de la cual se modifican los artículos 1° y 2° en sus numerales

1.2, 2.1 y 2.3 de la Ley 14 de 1990, en la cual se establece la distinción “Reservista de Honor”, y se dictan otras disposiciones.

Solicito de manera atenta tener en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio sobre el proyecto de ley.

Cordialmente,



YANETH GIHA  
Ministra de Educación Nacional

Copia: H.R. OLGA LUCIA VELÁSQUEZ NIETO- Autora  
H.R. EFRAIN TORRES – Ponente

**CONCEPTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 129  
DE 2016 CÁMARA**

por medio de la cual se modifican los artículos 1° y 2° en sus numerales 1.2, 2.1 y 2.3 de la Ley 14 de 1990, en la cual se establece la distinción “Reservista de Honor”, y se dictan otras disposiciones.

**I. CONSIDERACIONES PREVIAS**

Es preciso indicar que la Ley 14 que pretende ser modificada con esta iniciativa data del año 1990, fecha para la cual no se encontraba vigente la Constitución Política de 1991 y, por eso, es entendible que dicha norma en ciertos apartes, no sea acorde con algunos postulados constitucionales que hoy rigen el sector educativo. En todo caso, lo anterior no desconoce el control que sobre ella pueda ejercer la Corte Constitucional en virtud de sus competencias establecidas en el artículo 241 Superior.

Igualmente, resulta pertinente señalar que las iniciativas legislativas que estén orientadas a modificar la Ley 14 de 1990 necesariamente deben estar acorde con los principios y demás disposiciones establecidas en la Carta, con el fin de respetar la Supremacía de la Constitución, definida por la Corte Constitucional en Sentencia C-145 de 2012, así:

“La supremacía de la Constitución Política sobre el resto de prescripciones del sistema de derecho nacional, es un principio estructurante del orden jurídico: el conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo, se ordena en un sistema normativo, en virtud de la unidad y coherencia que le imprimen los valores, principios y reglas

establecidas en la Constitución. En otras palabras, el orden jurídico de la sociedad política se estructura a partir de la Carta Fundamental. Por eso, ha dicho la Corte: “La posición de supremacía de la Constitución - ha dicho esta Corporación - sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquella determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto, funda el orden jurídico mismo del Estado”.

**CONSIDERACIONES DE CONSTITUCIONALIDAD**

**1. Respeto del artículos 2°, numerales 1.1 y 1.4**

“Artículo 2°. Modifíquense los numerales 1.2., 2.1 y 2.3 del artículo 2° de la Ley 14 de 1990, los cuales quedaran así:

Artículo 2°. Los Reservistas de Honor a que se refiere el artículo anterior de la presente ley y los artículos 211, 182 y 138 y los Decretos 95, 96 y 97 de 1989, respectivamente, gozarán de los siguientes derechos y beneficios:

**1. EDUCACIÓN**

1.1. Educación básica y capacitación. Los establecimientos oficiales de enseñanza de todo nivel, tienen la obligación de admitir para los estudios respectivos, a los “Reservistas de Honor”, sin que tengan que pagar ninguna clase de contraprestación.

Los establecimientos privados de educación destinarán un cinco por ciento (5%) de las becas que por ley deben otorgar, para ser adjudicadas a los “Reservistas de Honor”, que tengan derecho a ingresar conforme a sus estatutos y reglamentos.

Las instituciones docentes informarán anualmente, a los Ministerios de Educación, Defensa y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, sobre el número de reservistas que hayan sido admitidos”.

(...)

“1.4. Capacitación tecnológica. Los centros oficiales que tengan como finalidad, la capacitación técnica o tecnológica, tienen la obligación de admitir como mínimo, un diez por ciento (10%) de “Reservistas de Honor”.

Con respecto al numeral 1.1 del artículo 2° del proyecto de ley bajo estudio, resulta necesario indicar que, si bien este se titula “educación básica y capacitación”, la regulación allí contenida es

extensible a la educación superior. Esto en razón a que la intención del Legislador es mejorar las oportunidades académicas y laborales de los reservistas de honor (según lo indicado la exposición de motivos) y al hecho de que al inicio del citado numeral se indica “Los establecimientos oficiales de enseñanza de todo nivel”.

Lo mismo ocurre con el numeral 1.4 del mismo artículo 2°, pues los centros de capacitación allí aludidos, son considerados hoy en día por los artículos 16 de la Ley 30 de 1992 y 213 de la Ley 115 de 1994, como instituciones de educación superior, más exactamente como instituciones técnico-profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.

Teniendo en cuenta estas aclaraciones, consideramos que el artículo 2° numerales 1.1 y 1.4 pueden resultar contrarios al principio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

De ahí que, en virtud de la autonomía universitaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-1435 de 2000, con ponencia de la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger dispuso:

*“Así, teniendo en cuenta la filosofía jurídica que ampara el principio de autonomía universitaria, la Corte ha definido su alcance y contenido a partir de dos grandes campos de acción que facilitan la realización material de sus objetivos pedagógicos: (1) la autorregulación filosófica, que opera dentro del marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico previamente adoptado por la institución para transmitir el conocimiento, y (2) la autodeterminación administrativa, orientada básicamente a regular lo relacionado con la organización interna de los centros educativos. A partir de tales supuestos, es posible afirmar, como ya lo ha hecho la Corte, que el derecho de acción de las universidades se concretan en la posibilidad de: (i) darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores; (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales; (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos, y (v) administrar sus propios bienes y recursos”. (Subrayado fuera del texto).*

Así las cosas y, teniendo claro, que las instituciones de educación superior gozan de autonomía, esta cartera propone a continuación tres reparos frente a las iniciativas propuestas que están relacionados con este principio constitucional.

El primero de ellos consiste en la obligación que se impone a las instituciones de educación superior para admitir a los reservistas en sus distintos planes de estudio, sin tener en cuenta la autonomía que estas instituciones educativas tienen para seleccionar y vincular a sus estudiantes.

Sobre la autonomía universitaria y los cupos dispuestos por las instituciones de educación superior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-672 de 1998, ha señalado lo siguiente:

*“Como lo ha señalado la Corte, el acceso a la educación superior está sujeta a distintas circunstancias que, en relación con la escogencia de aspirantes para ingresar a una universidad, imponen la obligación a sus respectivas autoridades de realizar un proceso de selección y evaluación, en virtud de la insuficiencia en la oferta de los cupos puestos a disposición de la comunidad por esos planteles educativos y dada la naturaleza de bienes públicos que les imprime la condición de servicio público que tiene la educación en Colombia. Esto último, además, exige que la selección se efectúe bajo parámetros de igualdad y con un criterio netamente objetivo, como el académico, a fin de establecer en forma imparcial el nivel de conocimientos y condiciones de cada aspirante, y distribuir, según esos resultados, los escasos cupos universitarios, de acuerdo con el merecimiento académico; (...).*

(...)

*Constituye un aspecto esencial en el ámbito universitario lo relativo a la autonomía de sus instituciones, reconocidas constitucionalmente en el artículo 69 superior. De manera pues que, forma parte del núcleo esencial de la misma el derecho que les asiste a esas instituciones para “darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”, así como a “seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos”. (Subrayado fuera de texto).*

De ahí que imponer a las instituciones de educación superior el deber de acoger a los reservistas de honor en sus distintos planes académicos, sin cumplir con los trámites y condiciones expuestos por cada una de ellas (tal como lo proponen los dos numerales analizados), implicaría una trasgresión

a los principios constitucionales de igualdad y autonomía universitaria.

En segundo lugar, si las instituciones oficiales son las encargadas de asumir el costo de la gratuidad dada a los reservistas para cursar su educación, eso implicaría una afectación a su autonomía, en virtud de la cual, ellas tienen la facultad de administrar sus propios recursos y, en ese orden de ideas, de definir en sus reglamentos internos, los beneficios económicos que se otorgarán a sus estudiantes, lo cual dependerá, en todo caso, de los análisis técnicos y financieros que permitan determinar la viabilidad de esta decisión.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-654 de 2007, expuso que:

*“Tratándose de entes de educación superior, la Corte entiende que la fijación de derechos académicos corresponde al ámbito de autonomía que les reconoce la Carta Política (artículo 69 Const.), que los faculta, entre otros aspectos importantes, para expedir libremente sus propios estatutos y adoptar su régimen interno, determinando al efecto las obligaciones surgidas entre educadores y educandos. Autonomía que, como lo ha precisado la jurisprudencia, es relativa. Valga observar que, dentro de la autonomía instituida y como tales recursos permiten que las universidades puedan financiar el servicio educativo y así alcanzar sus objetivos propuestos, el Estado no puede inmiscuirse en su manejo”.*

Por otro lado, si la iniciativa se orienta a que sea la Nación la encargada de financiar la gratuidad de la educación oficial a los reservistas, advertimos que esta propuesta llevaría consigo un impacto fiscal considerable para las finanzas públicas, frente a lo cual, el proyecto no determina cuál será la fuente de financiación. Es así que, se sugiere atender lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, que dispone:

*“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.*

*Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.*

Sobre la exigencia que hace el Legislador en la citada norma, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:

*“Evidentemente las normas contenidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un importante instrumento de racionalización de la actividad legislativa, con el fin de que ella se realice con conocimiento de causa de los costos fiscales que genera cada una de las leyes aprobadas por el Congreso de la República. También permiten que las leyes dictadas estén en armonía con la situación económica del país y con la política económica trazada por las autoridades correspondientes. Ello contribuye ciertamente a generar orden en las finanzas públicas, lo cual, repercute favorablemente en la estabilidad macroeconómica del país. De la misma manera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado artículo 7° ha de tener una incidencia favorable en la aplicación efectiva de las leyes, ya que la aprobación de las mismas solamente se producirá después de conocerse su impacto fiscal previsible y las posibilidades de financiarlo. Ello indica que la aprobación de las leyes no estará acompañada de la permanente incertidumbre acerca de la posibilidad de cumplirlas o de desarrollar la política pública en ellas plasmada. Con ello, los instrumentos contenidos en el artículo 7° analizado pueden contribuir a la superación de esa tradición existente en el país de efectos tan deletéreos en el Estado Social de Derecho -que lleva a aprobar leyes sin que se incorporen en el diseño de las mismas los elementos necesarios administrativos, presupuestales y técnicos- para asegurar su efectiva implementación y para hacer el seguimiento de los obstáculos que dificultan su cabal, oportuno y pleno cumplimiento”<sup>21</sup>.*

Por consiguiente, es claro para la Corte Constitucional que, como mínimo, el Congreso debe valorar las incidencias fiscales de sus iniciativas, lo cual no está ocurriendo en el presente caso, aspecto que no está acorde con el artículo 151 de la Constitución Política, según el cual las leyes orgánicas están llamadas a dirigir la actividad legislativa del Congreso de la República.

Así las cosas, dado que la Ley 819 de 2003 es de carácter orgánico, el Ministerio de Educación Nacional sugiere que sea atendido lo allí dispuesto para efectos de dar trámite al proyecto de ley analizado, y de ahí que consideramos pertinente, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronuncie sobre el impacto fiscal de la iniciativa propuesta en el numeral 1.1 y su concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El tercer y último reparo consiste en imponer que las instituciones de educación superior privadas deban destinar el 5% de sus becas a los reservistas de honor (numeral 1.1), obligación que resulta contraria al principio de autonomía univer-

sitaria, toda vez que son las instituciones privadas las encargadas de crear y desarrollar sus programas académicos y expedir sus reglamentos internos (verbigracia el reglamento estudiantil), en los cuales determinan los requisitos y procedimientos que deberán cumplirse para otorgar las becas que las mismas instituciones hayan decidido reconocer en el marco de su autonomía.

En mérito de lo antes expuesto, el contenido del artículo 2° en sus numerales 1.1 y 1.4, puede configurarse en una intervención en los procesos administrativos que las mismas instituciones definen para: i) el ingreso de sus estudiantes a programas académicos, y ii) otorgar apoyos económicos o becas que promuevan el acceso y permanencia de sus estudiantes.

Por lo anterior, este Ministerio solicita respetuosamente considerar la eliminación de los numerales 1.1 y 1.4 objeto del presente análisis.

## 2. Respeto del artículo 2°, numeral 1.2

*“1.2. Educación superior. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez”, (Icetex), deberá destinar anualmente un cinco por ciento (5%) de los créditos para estudios en el país, y un mínimo de cinco (5) cupos de las becas disponibles anualmente para especializaciones en el exterior a fin de atender las solicitudes que sobre estos beneficios presenten los “Reservistas de Honor”.*

Una vez analizado el citado numeral 1.2, se concluye que el proyecto de ley no cuenta con los estudios necesarios sobre el impacto fiscal que representa el aumentar el número de becas otorgadas a favor de la población a la que está dirigida, el cual pasaría de 3 a 5 cupos, en caso de aceptarse la modificación que sobre este punto se propone a la Ley 14 de 1990.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la iniciativa podría generar un impacto negativo a las finanzas del Icetex, puesto que se correría el riesgo de no contar con los recursos necesarios para la implementación de las becas adicionales.

En vista de lo anterior, es preciso realizar el análisis del impacto fiscal de la iniciativa, por respeto al principio de sostenibilidad fiscal consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política que reza:

*“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano*

*nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.*

(...).

*La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro, de sus competencias, en un marco de colaboración armónica* (Subrayado fuera de texto).

(...)”.

Vale la pena recordar que este principio de sostenibilidad fiscal fue avalado por la Corte Constitucional quien señaló que se trata de un criterio que orienta la actividad estatal para que a través de esta, se puedan alcanzar progresivamente las finalidades propias de un Estado Social de Derecho, sin desconocer en todo caso, las restricciones que genera el hecho de que los recursos públicos son limitados. Al respecto, el máximo órgano constitucional explicó:

*“Según lo expuesto, se tiene que el criterio de SF (Sostenibilidad Fiscal) está dirigido a disciplinar las finanzas públicas, de manera tal que la proyección hacia su desarrollo futuro reduzca el déficit fiscal, a través de la limitación de la diferencia entre los ingresos nacionales y los gastos públicos. Esto a partir de la evaluación de esa diferencia entre los distintos presupuestos sucesivos y de los factores endógenos y exógenos que la aumentan o reducen.*

*En cambio, el Acto Legislativo (haciendo referencia al Acto número 3 de 2011), define a la SF como un “marco” que tiene la función de “orientar, la acepción usual de esos conceptos indica que la SF, así entendida, consiste en un patrón o guía para la actuación de las autoridades del Estado, al carecer de la naturaleza y peso específico de los principios constitucionales, no cumple objetivos autónomos ni prescribe mandatos particulares que deban ser optimizados, sino que es una herramienta que solo adquirirá validez y función constitucionalmente relevante cuando permita cumplir los fines para los cuales fue prevista. Estas finalidades, debe insistirse, por expresa prescripción del Acto Legislativo 3 de 2011, no son otras que las propias del Estado Social y Democrático de Derecho” [1].*

También el análisis del impacto fiscal es indispensable dado que la Ley 819 de 2003 consagra

que tratándose de iniciativas que generen algún costo, se debe señalar expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas: “*La fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo*”. A continuación, señala la norma que además se debe contar con el respectivo concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cual en ningún caso podrá “(...) *ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo*”<sup>2</sup>.

Es de anotar que siendo la Ley 819 de 2003 orgánica, es esta la llamada a dirigir la actividad legislativa que adelante el Honorable Congreso de la República, según lo preceptuado en el artículo 151 de la Constitución Política. Por esta razón, si un proyecto de ley no atiende las reglas establecidas en dicha norma, aquel contendrá un vicio por vulnerar el referido mandato constitucional.

Incluso, la Corte Constitucional ha exaltado el carácter “*cuasi constitucional*” de las leyes orgánicas, lo que significa que son normas que pueden ser utilizadas para hacer un juicio de constitucionalidad a otras de inferior jerarquía normativa. Al respecto, en la Sentencia C-432 de 2000 dijo:

*“El criterio adoptado por la Corporación permite concluir que la ley orgánica del presupuesto se encuentra dotada de la característica especial de poder condicionar la expedición de otras leyes sobre la materia a sus prescripciones, de modo tal que una vulneración o desconocimiento de los procedimientos y principios que en ella se consagran al momento de la expedición de las leyes presupuestales ordinarias, puede acarrear la inconstitucionalidad de estas, debido al rango cuasi constitucional al que sus disposiciones han sido elevadas por voluntad expresa del Constituyente”.* (Subrayado fuera de texto).

Eso significa que el Ministerio de Educación Nacional no se opone al aumento de las becas otorgadas a los reservistas de honor, pero sí considera que la medida debe ser el resultado de un trabajo que armonice el beneficio que pretende ser reconocido con otro objetivo que también tienen las autoridades públicas en materia macroeconómica, como es el de reducir paulatinamente el déficit fiscal de la Nación.

Por los argumentos expuestos en este numeral, y en aras de garantizar la constitucionalidad del proyecto de ley analizado, es necesario indicar en las respectivas ponencias para debate, el costo fiscal que tendría que asumir el Presupuesto General de la Nación y la fuente de recursos adicionales que permitiría asumir el nuevo gasto propuesto por el Legislador, para lo cual, se hace indispensable

contar con el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de que trata el artículo 7° de la Ley 819 de 2003.

### 3. Respetto del artículo 2°, numeral 1.3

*“1.3 Educación especial. Los diferentes centros oficiales de educación especial, deben admitir al “Reservista de Honor”, cuando por su incapacidad física, le resultare imposible la integración al sistema educativo ordinario”.*

Como asunto previo, debemos anotar que de acuerdo con la legislación vigente que regula el sector educativo, no existen “*centros oficiales de educación especial*”. Lo anterior en razón a que con fundamento en el marco constitucional definido en 1991, en nuestro país se debe prestar el servicio de la educación con un enfoque inclusivo, de tal manera que tanto el Estado, como las familias y las instituciones educativas, deben adelantar acciones para promover que las personas que por diversas circunstancias han estado tradicionalmente excluidas de dicho servicio, puedan beneficiarse del mismo en condiciones de igualdad que el resto de la población colombiana.

En efecto, la educación inclusiva tiene varios fundamentos constitucionales: en primer lugar, el artículo 13 de la Constitución Política que consagra como deber del Estado el de “*promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva*” y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a las personas que, por su condición económica, física y mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.

Por su parte, el artículo 47 ibídem, consagra que el Estado debe adelantar “*una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran*” y, finalmente, el artículo 68 consagra como obligación especial del Estado “*la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales*”.

Así mismo, el Estado colombiano adoptó los acuerdos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la Ley 1346 de 2009, en la cual se destaca, entre otros aspectos, el deber del Estado de generar condiciones de accesibilidad y de hacer los ajustes razonables en función de las necesidades individuales de las personas con discapacidad, para que ellas puedan ingresar a cualquiera de los niveles del sistema educativo a lo largo de su vida, según lo establecido en el artículo 24 de la referida convención.

<sup>2</sup> Artículo 7°.

Posteriormente, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que ordena a las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos.

Por su parte, a nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional en Sentencia T-051 de 2011 con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, expuso el deber del Estado colombiano de promover una educación inclusiva a favor de las personas con discapacidad:

*“Desde hace varios años se ha empezado a apostar por un modelo de educación inclusiva alrededor de la discapacidad. Internacionalmente, las Declaraciones de Managua, Dakar y Salamanca, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, insisten en este modelo como la mejor vía para garantizar, en condiciones de igualdad, el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Para ilustrar, en su artículo 24 dice la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida (...)”.*

(...)

*Ahora bien, la llamada educación inclusiva, que es la apuesta de diferentes instrumentos internacionales y que además ha sido acogida por el Ministerio de Educación Nacional, busca ampliar el espectro de inclusión de personas con necesidades educativas especiales, más allá del acceso a la escuela regular. La educación inclusiva persigue que no existan ambientes segregados, sino que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos. Porter lo pone de manera sencilla: “[lo que se debe entender por educación inclusiva es simple (...)*

*En lo relativo a la educación inclusiva se puede observar la forma en que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge algunos de los postulados referidos con anterioridad con el objetivo de que la educación integradora sea desarrollada por los Estados. Sobre lo anterior el artículo 24 de la Convención fija una*

*orientación exhaustiva para abordar las falencias de los sistemas educativos y las barreras frente al acceso del servicio a la educación.*

*De este modo la mencionada norma, en conjunto con disposiciones específicas del instrumento, estructuran los arquetipos para promover la educación inclusiva como un todo. Es por ello que se torna indispensable que a nivel legislativo y de políticas públicas se respalde la eliminación tanto de las disposiciones discriminatorias como de las barreras históricas que limitan la participación de las personas en situación de discapacidad.*

*En síntesis, asegurar la efectiva prestación y protección de los eventos enunciados y de la filosofía del proceso de educación inclusiva contribuiría enormemente en la transformación de la concepción de las prácticas educativas de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, lo cual irremediablemente apuesta por transformar la cultura y la forma misma de concebir el derecho a la educación como un todo. A diferencia del proceso anterior, se explora porque la enseñanza se adapten los alumnos y no estos a la enseñanza”, (subrayado fuera del texto).*

En resumen, si bien la Ley 14 de 1990 hace referencia a “centros oficiales de educación especial”, consideramos que el trabajo que debe adelantar el Estado colombiano con fundamento en las normas que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad vigente, debe estar orientado a promover una educación inclusiva a favor de las personas con discapacidad, pues a nivel nacional e internacional se ha demostrado que esta estrategia, además de permitir el desarrollo personal de los miembros de esta comunidad, los reconoce como sujetos de derecho y como parte fundamental de la sociedad, de ahí que no pueden ser objeto de ningún tipo de segregación.

En mérito de lo expuesto, solicitamos respetuosamente eliminar el numeral 1.3 de artículo 2° de la iniciativa.

### III. CONCLUSIÓN

El Ministerio de Educación Nacional reconoce la intención meritoria de la iniciativa. Sin embargo, agradecemos atender las solicitudes efectuadas en este concepto.

\* \* \*

### CARTA DE COMENTARIOS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 095 DE 2016 CÁMARA

*por medio de la cual se establece la estabilidad laboral reforzada en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios*



*cuando sobrevenga el embarazo o la lactancia y se dictan otras disposiciones.*

Medellín, diciembre 22 de 2016

Doctor

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ

Presidente de la Cámara de Representantes

Congreso de la República

Carrera 8 N° 12B-42, Piso 4°

Bogotá, D. C.

**Asunto: Proyecto de ley número 095 de 2016 Cámara,** por medio de la cual se establece la estabilidad laboral reforzada en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios cuando sobrevenga el embarazo o la lactancia y se dictan otras disposiciones.

Respetado doctor Pinto Hernández:

El municipio de Medellín a través de la Secretaría General viene realizando un seguimiento a la Agenda Legislativa Nacional, en relación con los proyectos de ley que tienen incidencia en nuestra gestión administrativa, en desarrollo de esta fundamental tarea se tuvo conocimiento del **Proyecto de ley número 095 de 2016 Cámara;** en atención a ello, con la finalidad de hacernos partícipes y dar aportes a los temas de intereses territorial, me permito manifestar:

De conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, al Congreso de la República le corresponde hacer las leyes, por medio de ellas, le es factible expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; dicho estatuto fue establecido en su momento a través de la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se contemplaron condicionamientos frente a los contratos de prestación de servicios a ser suscritos por las entidades estatales y en su inciso final, se prescribió *“En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”*.

Al respecto, en Sentencia C-154 de 1997, la Corte Constitucional hizo el análisis de constitucionalidad del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; instancia en la cual tuvo en consideración, lo siguiente:

**2. Precisiones constitucionales en materia de contratación estatal**

(...)

*Dentro de la autonomía de la voluntad que tiene la administración para contratar, es necesario precisar que como función administrativa que ejerce, constituye una función reglada, lo que significa que debe someterse estrictamente a las estipulaciones legales sobre el particular, para la búsqueda del logro de las finalidades estatales mencionadas. Por consiguiente, el grado de autonomía que tiene la autoridad administrativa se ve ostensiblemente limitado frente a las reglas del derecho público, en materia de contratación.*

(...)

**4. El análisis de la norma demandada**

(...)

*De otro lado, se plantea que la pretendida discriminación conlleva no sólo una desnaturalización del contrato de prestación de servicios, sino también a la vulneración del derecho al trabajo reconocido en el preámbulo y artículos 1°, 2° y 25 de la Constitución y, por ende, de los principios mínimos laborales consagrados en el artículo 53 de la Carta Política, en especial, en lo que a la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la estabilidad en el empleo, se refiere.*

*Al respecto esta Corporación considera pertinente señalar que los principios mínimos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 53 constitucional son de carácter general y aplicables a todas las modalidades de la relación laboral; en consecuencia, en el caso sub examine su aplicación escapa al contenido y finalidad del contrato de prestación de servicios dada la independencia y autonomía con que el contratista ejecuta su labor, unido a la prohibición de que el mismo equivalga o se asimile a un contrato de trabajo salvo, lo enunciado en esta providencia para aquellos casos en que se acredite la existencia de la relación laboral.*

(...). (Subraya y negrilla fuera de texto).

De contenido del proyecto de Ley 95 de 2016, se evidencia que su intencionalidad es favorecer a las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, extendiendo entre otros derechos, los consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política (estabilidad en el empleo, protección especial a la mujer y la maternidad, y garantías a la seguridad social); sin embargo, tal como lo ha entendido la jurisprudencia reseñada los referidos derechos son aplicables respecto de las relaciones laborales propiamente, modalidad dentro de la cual por regla general no están incluidos los contratos de prestación de servicios, debido a que el

mismo ordenamiento legal le dio una connotación diferente (numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993).

En igual sentido, frente a los eventos bajo los cuales es procedente garantizar la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactación que esté ejecutando un contrato de prestación de servicios; es pertinente referenciar las consideraciones de la Sentencia T-092 de 2016 (retoma apartes de la Sentencia SU-070 de 2013 citada en la exposición de motivos del proyecto de ley), las cuales se detallan a continuación:

“(…)

**3.3. Reglas jurisprudenciales sobre la aplicación de la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia Reiteración de la Sentencia SU-070/13.**

... (ii) la alternativa laboral, bajo la cual se encontraba trabajando la mujer embarazada. Esto, con el fin de fijar las reglas de procedencia para la aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia y, las medidas de protección que debe imponer el juez de tutela.

(…)

**3.3.2. Presupuestos específicos de procedencia de la protección al derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o en periodo de lactancia.**

Conforme a lo anterior, este Tribunal precisó que la procedencia de la protección reforzada derivada del estado de embarazo, **se encuentra condicionada únicamente a la verificación de dos presupuestos: (i) la existencia de una relación laboral o de prestación de servicios, “esta última cuando se esté frente a un contrato realidad”<sup>1</sup> y, (ii) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación.**

(.. .)

**3.3.2.2. Contrato de prestación de servicios**

Respecto de esta modalidad de vinculación, en la Sentencia SU-070/13, la Corte consideró que:

**“En el supuesto de vinculación de la mujer gestante o lactante mediante contrato de prestación de servicios, el juez de tutela deberá analizar las circunstancias fácticas que rodean cada caso,**

**para determinar si bajo dicha figura contractual no se está ocultando la existencia de una auténtica relación laboral. Si bien la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para declarar la configuración de un “contrato realidad”, pues “existen las vías procesales ordinarias laborales o las contencioso administrativas, a través de las cuales [se] puede buscar el reconocimiento de una vinculación laboral”<sup>22</sup>, en los casos donde se encuentre en inminente riesgo de afectación el mínimo vital de la accionante u otro derecho constitucional fundamental, este estudio deberá ser realizado por el juez de tutela.**

... la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los elementos que configuran la existencia de un contrato de trabajo, son (i) el salario, (ii) la continua subordinación o dependencia y (iii) la prestación personal del servicio. Por lo tanto, si el juez de tutela **concluye la concurrencia de estos tres elementos en una vinculación mediante contrato de prestación de servicios de una trabajadora gestante o actante, podrá concluirse que se está en presencia de un verdadero contrato de trabajo.**

(…)

Con todo, en el supuesto en que la trabajadora gestante o lactante haya estado vinculada mediante un contrato de prestación de servicios y logre demostrarse la existencia de un contrato realidad, la Sala ha dispuesto que se deberán aplicar las reglas propuestas para los contratos a término fijo...

(…)” (Negrilla y subraya fuera de texto).

Si tal como se aduce en la exposición de motivos, la iniciativa legislativa “Busca que se eleve a rango legal los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde ha amparado los derechos fundamentales de la mujer en estado de embarazo...”; el derecho a una estabilidad laboral reforzada durante el embarazo o lactancia, debe sujetarse solo a las situaciones en las cuales se evidencie o genere una verdadera relación laboral, como sucede en el caso de un contrato realidad.

De mantenerse la propuesta inicial, en la cual se fijan condicionamientos generales para la ejecución de los contratos de prestación de servicio, independientemente de estar frente a situaciones

<sup>1</sup> Cfr. Sentencia T-148/14, M. P. Mauricio González Cuervo, que reiteró lo dispuesto en la Sentencia SU-070 de 2013.

<sup>22</sup> La Sentencia T-335 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, determinó que “este tipo de análisis debe realizarlo el juez de tutela, únicamente cuando existen indicios de afectación del mínimo vital del accionante o de algún otro tipo de derecho fundamental. En otros casos, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, existen las vías procesales ordinarias laborales o las contencioso administrativas, a través de las cuales puede buscar el reconocimiento de una vinculación laboral”.

que impliquen la existencia de un contrato realidad; en lo que respecta a las personas jurídicas de derecho público, se debería incluir en el articulado del **Proyecto de ley 95 de 2016**, una modificación expresa del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tendiente a descartar el supuesto legal vigente. (En ningún caso los contratos de prestación de servicios generan relación laboral).

Finalmente, es importante dejar presente que en desarrollo del seguimiento a la agenda legislativa, también se requirió a las Secretarías de Despacho con competencias asociadas al tema bajo análisis y en respuesta a dicho requerimiento, la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía planteó las siguientes observaciones y sugerencias:

Proyecto de ley número 95 de 2016		
Artículos	Observaciones	Sugerencias
1°	Dice el artículo que tiene aplicación en favor de la mujer “vinculada”.	El contrato de prestación de servicios no es una forma de vinculación laboral.
4° (Parágrafo 1°)	Se refiere a la “trabajadora”	El contrato de prestación de servicios no es una forma de vinculación laboral.
4° (Parágrafo 4°)	El artículo señala que la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud se liquidará sobre el valor del respectivo contrato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los contratistas durante la ejecución del contrato cotizan al Sistema de Seguridad Social integral por el 40% de sus ingresos, por lo que el pago de la licencia es sobre dicha suma. Al establecerse la liquidación por el valor total del contrato no queda claro la suma de la cotización y a cargo de quién queda.</li> <li>- Durante el tiempo que la contratista esté en licencia, el contratante debe asumir algún pago de los aportes en dicho periodo?</li> <li>- Se generaría una modificación al artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.</li> </ul>
5°	El permiso de lactancia establece que las partes acuerden el tiempo para amamantar.	En los contratos de prestación de servicio por regla general no se cumple horario, por lo que no es conveniente establecer un artículo que fije un permiso entre las partes porque puede eventualmente configurarse una subordinación.
6°	Se establece que la licencia de calamidad doméstica es incompatible con la licencia de paternidad.	Por las características del contrato de prestación de servicios no es posible la configuración de la licencia de calamidad doméstica, por ser esta propia del vínculo laboral.
7°	El artículo establece la prohibición de terminar el contrato de prestación de servicios por motivo de embarazo o lactancia. Así mismo, no podrá dejarse de renovar si subsisten las razones que dieron lugar al mismo y la contratista ha cumplido satisfactoriamente el contrato.	<p>Los contratos de prestación de servicios personales requieren prohibición de requisitos legales como previa disponibilidad presupuestal y justificación de la necesidad a contratar, entre otros.</p> <p>Además el presupuesto de las entidades públicas tienen el carácter de anualidad del gasto, situación que impide se renueve en las condiciones que establece el artículo.</p> <p>Se propone la siguiente redacción: “A partir de la promulgación de la presente ley, a ninguna mujer mediante contrato de prestación de servicio, se le podrá dar por terminado el vínculo contractual por motivo de embarazo o lactancia, salvo vencimiento del plazo del mismo o terminación anticipada del contrato.</p>
8°	Se establece que se debe acudir ante la autoridad competente para obtener el permiso para terminar el contrato.	En el caso de los contratos celebrados con entidades públicas y teniendo en cuenta las características del contrato de prestación de servicios, no es claro cuál es la entidad competente que deba otorgar este permiso.

Cordialmente,

  
**VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO**  
 Secretaria General

CARTA DE COMENTARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 21 DE 2015 CÁMARA

19/ma de la Ley 506 de 2004.

CARTA DE COMENTARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 21 DE 2015 CÁMARA.

BOGOTÁ, D. C., 5 de septiembre de 2015

ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

Procurador General de la Nación

Respetado señor Presidente del Senado

CONSEJAR NOMBRE Y FIRMA EN FORMATO PDF

Table with 4 columns: LEY 986 DE 2004, ANTERIOR ARTICULO (ESTUDIO), NUEVO ARTICULO (ESTUDIO), OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO

Table with 4 columns: LEY 986 DE 2004, ANTERIOR ARTICULO (ESTUDIO), NUEVO ARTICULO (ESTUDIO), OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO

Table with 4 columns: LEY 986 DE 2004, ANTERIOR ARTICULO (ESTUDIO), NUEVO ARTICULO (ESTUDIO), OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO

Table with 4 columns: LEY 986 DE 2004, ANTERIOR ARTICULO (ESTUDIO), NUEVO ARTICULO (ESTUDIO), OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO





LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p><b>ARTÍCULO 81. CONTINUACIÓN DE LA PERSECUCCIÓN PENAL PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.</b> La acción penal no comienza en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</p>	<p><b>ARTÍCULO 81. Continuidad de la persecución penal para los delitos indicados, imputados o procesados en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</b></p>	<p><b>ARTÍCULO 81. Continuidad de la persecución penal para los delitos indicados, imputados o procesados en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</b></p>	<p>Se sugiere especificar el artículo 81 de la Ley 906 de 2004, para que se refiera a los delitos que se mencionan en el artículo 81 de la Ley 906 de 2004, y no a los delitos que se mencionan en el artículo 81 de la Ley 906 de 2004.</p>
<p><b>ARTÍCULO 85. SUSPENSIÓN DE LA PERSECUCCIÓN PENAL PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.</b> La acción penal no comienza en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</p>	<p><b>ARTÍCULO 85. Suspensión del poder de persecución penal para los delitos indicados, imputados o procesados en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</b></p>	<p><b>ARTÍCULO 85. Suspensión del poder de persecución penal para los delitos indicados, imputados o procesados en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</b></p>	<p>Se sugiere en la formulación de la Ley 906 de 2004, para que se refiera a los delitos que se mencionan en el artículo 85 de la Ley 906 de 2004, y no a los delitos que se mencionan en el artículo 85 de la Ley 906 de 2004.</p>
<p><b>ARTÍCULO 90. OMBUSÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA.</b> La acción penal no comienza en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</p>	<p><b>ARTÍCULO 90. Ombusón de la defensa pública.</b> La acción penal no comienza en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</p>	<p><b>ARTÍCULO 90. Ombusón de la defensa pública.</b> La acción penal no comienza en quienes no concurren las causales de suspensión de la persecución penal.</p>	<p>Se sugiere en la formulación de la Ley 906 de 2004, para que se refiera a los delitos que se mencionan en el artículo 90 de la Ley 906 de 2004, y no a los delitos que se mencionan en el artículo 90 de la Ley 906 de 2004.</p>

  

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p><b>ARTÍCULO 27. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 906 DE 2004.</b> El cual quedará así:</p>	<p><b>ARTÍCULO 27. Modifíquese el artículo 85 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</b></p>	<p><b>ARTÍCULO 27. Modifíquese el artículo 85 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</b></p>	<p>Se sugiere en la formulación de la Ley 906 de 2004, para que se refiera a los delitos que se mencionan en el artículo 27 de la Ley 906 de 2004, y no a los delitos que se mencionan en el artículo 27 de la Ley 906 de 2004.</p>
<p><b>ARTÍCULO 28. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 906 DE 2004.</b> El cual quedará así:</p>	<p><b>ARTÍCULO 28. El artículo 85 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</b></p>	<p><b>ARTÍCULO 28. El artículo 85 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</b></p>	<p>Se sugiere en la formulación de la Ley 906 de 2004, para que se refiera a los delitos que se mencionan en el artículo 28 de la Ley 906 de 2004, y no a los delitos que se mencionan en el artículo 28 de la Ley 906 de 2004.</p>
<p><b>ARTÍCULO 29. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 906 DE 2004.</b> El cual quedará así:</p>	<p><b>ARTÍCULO 29. El artículo 85 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</b></p>	<p><b>ARTÍCULO 29. El artículo 85 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</b></p>	<p>Se sugiere en la formulación de la Ley 906 de 2004, para que se refiera a los delitos que se mencionan en el artículo 29 de la Ley 906 de 2004, y no a los delitos que se mencionan en el artículo 29 de la Ley 906 de 2004.</p>









LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
LEY 966 DE 2004	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 108. Casación # enjuiciado.</p> <p>ARTÍCULO 114. Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento del deber de investigación, tiene las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigar y hacer responsables de haber cometido un delito.</li> <li>2. Aplicar el principio de oportunidad en los casos de delitos menores y condiciones definidas por esta Ley.</li> <li>3. Ordenar registros, allanamientos, allanamientos, de control de personas, los elementos de control de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de comunicaciones, por el momento del delito de las pruebas y otros (20) horas siguientes.</li> <li>4. Asignar los elementos materiales probatorios a los términos del expediente obrante en los términos del artículo 225 de la Constitución Política. En estos términos el Jefe de Control de Comunicaciones podrá solicitar auxilio de Control de Comunicaciones de personas que ejercen la función de protección de procesos que</li> </ol>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 108. Casación # enjuiciado.</p> <p>ARTÍCULO 114. Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento del deber de investigación, tiene las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigar y hacer responsables de haber cometido un delito.</li> <li>2. Aplicar el principio de oportunidad en los casos de delitos menores y condiciones definidas por esta Ley.</li> <li>3. Ordenar registros, allanamientos, allanamientos, de control de personas, los elementos de control de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de comunicaciones, por el momento del delito de las pruebas y otros (20) horas siguientes.</li> <li>4. Asignar los elementos materiales probatorios a los términos del expediente obrante en los términos del artículo 225 de la Constitución Política. En estos términos el Jefe de Control de Comunicaciones podrá solicitar auxilio de Control de Comunicaciones de personas que ejercen la función de protección de procesos que</li> </ol>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 108. Casación # enjuiciado.</p> <p>ARTÍCULO 114. Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento del deber de investigación, tiene las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigar y hacer responsables de haber cometido un delito.</li> <li>2. Aplicar el principio de oportunidad en los casos de delitos menores y condiciones definidas por esta Ley.</li> <li>3. Ordenar registros, allanamientos, allanamientos, de control de personas, los elementos de control de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de comunicaciones, por el momento del delito de las pruebas y otros (20) horas siguientes.</li> <li>4. Asignar los elementos materiales probatorios a los términos del expediente obrante en los términos del artículo 225 de la Constitución Política. En estos términos el Jefe de Control de Comunicaciones podrá solicitar auxilio de Control de Comunicaciones de personas que ejercen la función de protección de procesos que</li> </ol>
LEY 966 DE 2004	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. Medidas de atención y protección. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. Medidas de atención y protección. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>
LEY 966 DE 2004	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. Medidas de atención y protección. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. Medidas de atención y protección. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>
LEY 966 DE 2004	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. Medidas de atención y protección. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ACUSACIÓN-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 134. Medidas de atención y protección. Las víctimas, en garantía de su integridad física, psicológica, moral, económica y patrimonial, podrán ser condecoradas por el juez de control de</p>

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
LEY 906 DE 2004	ARTICULO 138. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	ARTÍCULO 138. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	Artículo 43. Modifíquese el artículo 138 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
LEY 906 DE 2004	ARTICULO 139. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	ARTÍCULO 139. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	Artículo 43. Modifíquese el artículo 138 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
LEY 906 DE 2004	ARTICULO 140. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	ARTÍCULO 140. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	Artículo 43. Modifíquese el artículo 138 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
LEY 906 DE 2004	ARTICULO 141. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	ARTÍCULO 141. Cuando el juez de familia o el juez de familia en ausencia de la familia, al emitir el fallo, deberá tener en cuenta las necesidades de las partes, las condiciones de vida de los hijos y el bienestar de los mismos. Sin embargo, las sentencias emitidas por el juez de familia no podrán ser revisadas por el juez de familia en ausencia de la familia.	Artículo 43. Modifíquese el artículo 138 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROYECTO DE LEY NUMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO DE 2015 CÁMARA ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 906 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 142. Diferenciar específicos de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p>	<p>OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE AL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>

LEY 996 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTATORIO-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 996 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD. Las audiencias preliminares deben realizarse con la asistencia del Ministerio Público no es obligatoria. Serán de carácter reservado los adelantamientos, registros, interrogatorio de personas y de comparecencias. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>	<p>ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD Y asistencia de las partes e intervinientes. Las audiencias preliminares deben realizarse con la asistencia de quienes hubieran sido imputados o parientes que pudieran resultar afectados con la decisión, salvo por un acuerdo reservado. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>	<p>Es una norma que indica detalles de interpretaciones, como la posibilidad de que se realicen audiencias preliminares, registros, interrogatorios, etc., en casos de asesinatos, impunidad y víctimas. Siempre y cuando se garantice el derecho de la defensa técnica incluso antes de un acuerdo reservado. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>
<p>LEY 996 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD. Las audiencias preliminares deben realizarse con la asistencia del Ministerio Público no es obligatoria. Serán de carácter reservado los adelantamientos, registros, interrogatorio de personas y de comparecencias. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>	<p>ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD Y asistencia de las partes e intervinientes. Las audiencias preliminares deben realizarse con la asistencia de quienes hubieran sido imputados o parientes que pudieran resultar afectados con la decisión, salvo por un acuerdo reservado. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>	<p>Es una norma que indica detalles de interpretaciones, como la posibilidad de que se realicen audiencias preliminares, registros, interrogatorios, etc., en casos de asesinatos, impunidad y víctimas. Siempre y cuando se garantice el derecho de la defensa técnica incluso antes de un acuerdo reservado. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>
<p>LEY 996 DE 2004</p>	<p>ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD. Las audiencias preliminares deben realizarse con la asistencia del Ministerio Público no es obligatoria. Serán de carácter reservado los adelantamientos, registros, interrogatorio de personas y de comparecencias. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>	<p>ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD Y asistencia de las partes e intervinientes. Las audiencias preliminares deben realizarse con la asistencia de quienes hubieran sido imputados o parientes que pudieran resultar afectados con la decisión, salvo por un acuerdo reservado. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>	<p>Es una norma que indica detalles de interpretaciones, como la posibilidad de que se realicen audiencias preliminares, registros, interrogatorios, etc., en casos de asesinatos, impunidad y víctimas. Siempre y cuando se garantice el derecho de la defensa técnica incluso antes de un acuerdo reservado. La información con respecto a la realización de inspección corporal, impunidad y procedimientos en casos de asesinatos, igualmente quedan en la que decreta una medida cautelar.</p>



LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
	Para la audiencia de formulación de imputación, el fiscal de la acusación deberá comparecer a la audiencia dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de la formulación de la acusación preparatoria.		La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de la formulación de la acusación preparatoria.	PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA
	El juez de la causa podrá ordenar el traslado de las actuaciones a otro juzgado competente cuando el traslado sea necesario para la investigación o para el juicio oral. Cuando se trate de casos de competencia de los jueces penales de primera instancia, el traslado deberá ser de cinco días.		Parágrafo 1°. La fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la formulación de la acusación preparatoria para comunicarle el traslado a los imputados. Este término máximo será de tres años cuando se presente el caso de competencia de los jueces penales de segunda instancia, y de cinco años cuando se presente el caso de competencia de los jueces penales de tercera instancia.	
	Parágrafo 2°. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales de primera instancia, el traslado de las actuaciones deberá ser de cinco días. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales de segunda instancia, el traslado de las actuaciones deberá ser de tres años cuando se presente el caso de competencia de los jueces penales de primera instancia, y de cinco años cuando se presente el caso de competencia de los jueces penales de segunda instancia.		Parágrafo 2°. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales de primera instancia, el traslado de las actuaciones deberá ser de cinco días. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales de segunda instancia, el traslado de las actuaciones deberá ser de tres años cuando se presente el caso de competencia de los jueces penales de primera instancia, y de cinco años cuando se presente el caso de competencia de los jueces penales de segunda instancia.	

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
	Artículo 55. Adiciamente el artículo 179 A en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:		Artículo 55. Adiciamente el artículo 179 A en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:	PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
	Artículo 174. Imputación excepcional El recurso de imputación excepcional corresponde en los casos no contemplados en el artículo 173 cuando se presente un delito que no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria. Este recurso de imputación excepcional procede en los casos de imputación excepcional cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.		Artículo 174A. Imputación excepcional El recurso de imputación excepcional corresponde en los casos no contemplados en el artículo 173 cuando se presente un delito que no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria. Este recurso de imputación excepcional procede en los casos de imputación excepcional cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.	PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA
	Artículo 174B. Imputación excepcional El recurso de imputación excepcional corresponde en los casos no contemplados en el artículo 173 cuando se presente un delito que no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria. Este recurso de imputación excepcional procede en los casos de imputación excepcional cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.		Artículo 174B. Imputación excepcional El recurso de imputación excepcional corresponde en los casos no contemplados en el artículo 173 cuando se presente un delito que no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria. Este recurso de imputación excepcional procede en los casos de imputación excepcional cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.	

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
	Artículo 175. Recurso de nulidad de sentencia condenatoria. El recurso de nulidad de sentencia condenatoria procede en los casos de nulidad de sentencia condenatoria cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.		Artículo 175A. Recurso de nulidad de sentencia condenatoria. El recurso de nulidad de sentencia condenatoria procede en los casos de nulidad de sentencia condenatoria cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.	PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO ACUSATORIO-COMPARADO TABLA
	Artículo 175B. Recurso de nulidad de sentencia condenatoria. El recurso de nulidad de sentencia condenatoria procede en los casos de nulidad de sentencia condenatoria cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.		Artículo 175B. Recurso de nulidad de sentencia condenatoria. El recurso de nulidad de sentencia condenatoria procede en los casos de nulidad de sentencia condenatoria cuando el delito no haya sido imputado al acusado en la sentencia condenatoria.	









LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>Tendrán podrán realizar investigaciones en respectos: envejecimiento de orden geográfico, pedológico, botánico y zoofitológico, con el fin de determinar las perturbaciones causadas por las actividades humanas, así como el estado de conservación de los recursos naturales, y evaluar las medidas oportuna de conservación, entre otros.</p> <p>Los productores de estos análisis podrán ser privados o públicos. Las mismas facultades las tendrán la academia y la defensoría.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>
<p>Se elimina en nuevo Proyecto, investigaciones en el territorio.</p> <p>Se elimina en nuevo Proyecto.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>
<p>Siempre, deberá ser individual la investigación en el contrato resulte del acuerdo de voluntades de las partes, por lo tanto, no pueden compararse los contratos de un mismo tipo de actividad, ya que cada uno de ellos tiene sus propias características, como la especialización de los elementos contractuales, la importancia del contrato, el riesgo, la necesidad de un principio orientador de la investigación que no puede reemplazarse por el principio de igualdad de partes, por lo tanto, cada uno de ellos debe ser tratado de manera autónoma. Queda intacto.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>

LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>Artículo 224. Plazo de diligenciamiento de la investigación y de la entrega de los resultados. La investigación y el diligenciamiento deberá ser diligenciado en un término máximo de treinta (30) días, a partir de la fecha de la investigación y de la entrega de los resultados de la investigación. En el evento de que el diligenciamiento se prolongue por el mismo tiempo.</p> <p>Artículo 24. Examen y devolución de la investigación y de los resultados. La investigación y los resultados de la misma serán examinados por el juez que expidió el orden, que resulten relevantes a los fines de la investigación, en un plazo máximo de doce (12) horas, informará de ello al juez que expidió el orden.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>
<p>Artículo 24. Examen y devolución de la investigación y de los resultados. La investigación y los resultados de la misma serán examinados por el juez que expidió el orden, que resulten relevantes a los fines de la investigación, en un plazo máximo de doce (12) horas, informará de ello al juez que expidió el orden.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>

LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>Artículo 24. Examen y devolución de la investigación y de los resultados. La investigación y los resultados de la misma serán examinados por el juez que expidió el orden, que resulten relevantes a los fines de la investigación, en un plazo máximo de doce (12) horas, informará de ello al juez que expidió el orden.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>
<p>Artículo 73. La Ley 900 de 2004, tendrá un nuevo artículo 207A, así:</p> <p>Artículo 207A. Otros métodos de investigación que permitan la obtención de evidencia científica y documental, de carácter íntimo y personal, en los casos de violencia de género, se establecerán por ley.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>

LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>Artículo 24. Examen y devolución de la investigación y de los resultados. La investigación y los resultados de la misma serán examinados por el juez que expidió el orden, que resulten relevantes a los fines de la investigación, en un plazo máximo de doce (12) horas, informará de ello al juez que expidió el orden.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>
<p>Artículo 73. La Ley 900 de 2004, tendrá un nuevo artículo 207A, así:</p> <p>Artículo 207A. Otros métodos de investigación que permitan la obtención de evidencia científica y documental, de carácter íntimo y personal, en los casos de violencia de género, se establecerán por ley.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUATORIO-COMPARADO TABLA.</p>







<p>LEY 996 DE 2004</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>NOVIEMBRE 2015 MINISTERIO PÚBLICO</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 996 DE 2004</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>NOVIEMBRE 2015 MINISTERIO PÚBLICO</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>

<p>LEY 996 DE 2004</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>NOVIEMBRE 2015 MINISTERIO PÚBLICO</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>
<p>LEY 996 DE 2004</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>	<p>NOVIEMBRE 2015 MINISTERIO PÚBLICO</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p>













LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>La ley 966 de 2004, en su artículo 17, no establece mérito para acusar.</p>	<p>Artículo 117. Modifíquese el artículo 332 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p> <p>Artículo 332. Causales. El fiscal solicitará la prisión preventiva cuando concurren las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.</li> <li>2. Existencia de una causal que anule la presunción de inocencia, de acuerdo con el Código Penal.</li> <li>3. Inevitable del hecho investigado.</li> <li>4. Ausencia de libertad o participación del sujeto investigado.</li> <li>5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.</li> <li>6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.</li> <li>7. Vinculamiento del imputado previsto en el artículo 244 del Código Penal.</li> </ol>	<p>Artículo 108. Adiciónese un inciso final al artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p> <p>Artículo 327. Control judicial en la aplicación de garantías. El juez de control de garantías deberá declarar el control de garantías sobre el control de libertad de los sujetos sometidos a control de garantías de la fiscalía de los casos (5) que se agitan, a la luz de los principios de oportunidad que aplicará el juez de control de garantías.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>
LEY 966 DE 2004	<p>Artículo 327. CONTROL JUDICIAL DE OPORTUNIDAD. Artículo 327. Control judicial en la aplicación de garantías. El juez de control de garantías deberá declarar el control de libertad de los sujetos sometidos a control de garantías de la fiscalía de los casos (5) que se agitan, a la luz de los principios de oportunidad que aplicará el juez de control de garantías.</p>	<p>Artículo 108. Adiciónese un inciso final al artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p> <p>Artículo 327. Control judicial en la aplicación de garantías. El juez de control de garantías deberá declarar el control de garantías sobre el control de libertad de los sujetos sometidos a control de garantías de la fiscalía de los casos (5) que se agitan, a la luz de los principios de oportunidad que aplicará el juez de control de garantías.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>
LEY 966 DE 2004	<p>Artículo 334. Efectos de la decisión de prisión preventiva. En el momento de la decisión de prisión preventiva, el juez de control de garantías de la fiscalía deberá declarar la prisión preventiva cuando concurren las siguientes circunstancias:</p>	<p>Artículo 334. Efectos de la decisión de prisión preventiva. En el momento de la decisión de prisión preventiva, el juez de control de garantías de la fiscalía deberá declarar la prisión preventiva cuando concurren las siguientes circunstancias:</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>
LEY 966 DE 2004	<p>Artículo 334. Efectos de la decisión de prisión preventiva. En el momento de la decisión de prisión preventiva, el juez de control de garantías de la fiscalía deberá declarar la prisión preventiva cuando concurren las siguientes circunstancias:</p>	<p>Artículo 334. Efectos de la decisión de prisión preventiva. En el momento de la decisión de prisión preventiva, el juez de control de garantías de la fiscalía deberá declarar la prisión preventiva cuando concurren las siguientes circunstancias:</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ACUSATORIO-COMPARADO TABLA</p> <p>Parágrafo 1º. El juez de control de garantías de la fiscalía determinará un término para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, según el término requerido para el cumplimiento de los requisitos de la acción penal, en el caso de que dicho término no pueda vencer dentro de los términos establecidos en el artículo 327 de la Ley 966 de 2004, en el texto que así:</p>

LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p><b>ARTICULO 316. RECHAZO DE LA SOLICITUD DE PRECLUSION.</b> En producción. En firme el auto que rechaza la diligencia volverán a la Fiscalía, diligenciar y firme que duró el trámite de el trámite de la preclusión.</p>	<p><b>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 316. RECHAZO DE LA SOLICITUD DE PRECLUSION.</b> En producción. En firme el auto que rechaza la diligencia volverán a la Fiscalía, diligenciar y firme que duró el trámite de el trámite de la preclusión.</p>	<p><b>PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 316. RECHAZO DE LA SOLICITUD DE PRECLUSION.</b> En firme el auto que rechaza la diligencia volverán a la Fiscalía, diligenciar y firme que duró el trámite de el trámite de la preclusión.</p>	<p>Observaciones Ministerio Público</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p>

LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p><b>ARTICULO 317. TRAMITE DE PRECLUSION.</b> Abierta por el juez la diligencia para la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal, el juez ordenará la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal.</p>	<p><b>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 317. TRAMITE DE PRECLUSION.</b> Abierta por el juez la diligencia para la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal, el juez ordenará la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal.</p>	<p><b>PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 317. TRAMITE DE PRECLUSION.</b> Abierta por el juez la diligencia para la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal, el juez ordenará la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal.</p>	<p>Observaciones Ministerio Público</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p>

LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p><b>ARTICULO 317. CONTENIDO DE LA ACUSACION Y DOCUMENTOS DEBEN COMPROBAR.</b> La acusación deberá contener:</p> <p>1. La individualización concreta de quienes son los sujetos pasivos de la acción penal, para identificación y el domicilio de cada uno de ellos.</p>	<p><b>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 317. CONTENIDO DE LA ACUSACION Y DOCUMENTOS DEBEN COMPROBAR.</b> La acusación deberá contener:</p> <p>1. La individualización concreta de quienes son los sujetos pasivos de la acción penal, para identificación y el domicilio de cada uno de ellos.</p>	<p><b>PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 317. CONTENIDO DE LA ACUSACION Y DOCUMENTOS DEBEN COMPROBAR.</b> La acusación deberá contener:</p> <p>1. La individualización concreta de quienes son los sujetos pasivos de la acción penal, para identificación y el domicilio de cada uno de ellos.</p>	<p>Observaciones Ministerio Público</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p>

LEY 966 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p><b>ARTICULO 318. TRAMITE DE PRECLUSION.</b> Abierta por el juez la diligencia para la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal, el juez ordenará la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal.</p>	<p><b>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 318. TRAMITE DE PRECLUSION.</b> Abierta por el juez la diligencia para la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal, el juez ordenará la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal.</p>	<p><b>PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</b></p> <p><b>ARTICULO 318. TRAMITE DE PRECLUSION.</b> Abierta por el juez la diligencia para la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal, el juez ordenará la producción de pruebas que se requieran para la instrucción de la acción penal.</p>	<p>Observaciones Ministerio Público</p> <p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p>





LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ASISTENTE/COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
	Artículo 349. Imprudencia con el imputado. Con el fin de humillar la actuación procesal y la pena, el Fiscal General debe imponer la prisión preventiva al imputado cuando la conducta de este último haya sido determinante para el desarrollo del proceso penal. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia.	Artículo 349. Imprudencia. Con el fin de humillar la actuación procesal y la pena, el Fiscal General debe imponer la prisión preventiva al imputado cuando la conducta de este último haya sido determinante para el desarrollo del proceso penal. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia.	Artículo 349. Imprudencia. Con el fin de humillar la actuación procesal y la pena, el Fiscal General debe imponer la prisión preventiva al imputado cuando la conducta de este último haya sido determinante para el desarrollo del proceso penal. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia.	Observaciones Ministerio Público: Se omite el inciso 1º del artículo 349 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: "Artículo 349. Imprudencia. Con el fin de humillar la actuación procesal y la pena, el Fiscal General debe imponer la prisión preventiva al imputado cuando la conducta de este último haya sido determinante para el desarrollo del proceso penal. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia."

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ASISTENTE/COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
	Artículo 351. Modalidades. Los actos de imputación y los actos de participación en la imputación, cuando se cometan en las siguientes modalidades:	Artículo 351. Modalidades. Los actos de imputación y los actos de participación en la imputación, cuando se cometan en las siguientes modalidades:	Artículo 351. Modalidades. Los actos de imputación y los actos de participación en la imputación, cuando se cometan en las siguientes modalidades:	Observaciones Ministerio Público: Nuevo. Sin comentario.

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ASISTENTE/COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
	Artículo 350. Oportunidad para realizar los actos de imputación y los actos de participación en la imputación, cuando se cometan en las siguientes modalidades:	Artículo 350. Oportunidad para realizar los actos de imputación y los actos de participación en la imputación, cuando se cometan en las siguientes modalidades:	Artículo 350. Oportunidad para realizar los actos de imputación y los actos de participación en la imputación, cuando se cometan en las siguientes modalidades:	Observaciones Ministerio Público: Sin comentario.

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ DE ASISTENTE/COMPARADO TABLA	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
	Artículo 352. Evidencia. El Fiscal General debe imponer la prisión preventiva al imputado cuando la conducta de este último haya sido determinante para el desarrollo del proceso penal. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia.	Artículo 352. Evidencia. El Fiscal General debe imponer la prisión preventiva al imputado cuando la conducta de este último haya sido determinante para el desarrollo del proceso penal. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia.	Artículo 352. Evidencia. El Fiscal General debe imponer la prisión preventiva al imputado cuando la conducta de este último haya sido determinante para el desarrollo del proceso penal. El imputado no podrá ser beneficiario de ningún beneficio de gracia ni de ningún otro beneficio de gracia.	Observaciones Ministerio Público: Sin comentario.













ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>LEY 966 DE 2004</p> <p>ARTÍCULO 449. LIBERTAD INMEDIATA. De ser abyecto de la pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas podrá disponer la libertad condicional de un condenado a prisión, en los casos previstos en esta ley, cuando se acredite que el condenado ha cumplido con las obligaciones correspondientes.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p> <p>Artículo 449. Competencia. El juez de ejecución de penas podrá ser declarado culpable por hechos que no constituyen delito en el momento de la imputación, y que no reúnan los requisitos para ser declarados culpables por hechos que sí constituyen delito en el momento de la imputación.</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO PÚBLICO PARA EL SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p> <p>Artículo 449. Competencia. El juez de ejecución de penas podrá ser declarado culpable por hechos que no constituyen delito en el momento de la imputación, y que no reúnan los requisitos para ser declarados culpables por hechos que sí constituyen delito en el momento de la imputación.</p>
<p>LEY 966 DE 2004</p> <p>ARTÍCULO 457. NULIDAD POR FUNDAMENTALES. El juez de ejecución de penas podrá declarar la nulidad de un acto de ejecución de penas cuando los hechos que se alegan no reúnan los requisitos para ser declarados culpables por hechos que sí constituyen delito en el momento de la imputación.</p>	<p>Artículo 457. Nulidad por violación al debido proceso en aspectos sustanciales. El juez de ejecución de penas podrá declarar la nulidad de un acto de ejecución de penas cuando los hechos que se alegan no reúnan los requisitos para ser declarados culpables por hechos que sí constituyen delito en el momento de la imputación.</p>	<p>Artículo 457. Nulidad por violación al debido proceso en aspectos sustanciales. El juez de ejecución de penas podrá declarar la nulidad de un acto de ejecución de penas cuando los hechos que se alegan no reúnan los requisitos para ser declarados culpables por hechos que sí constituyen delito en el momento de la imputación.</p>
<p>LEY 966 DE 2004</p> <p>ARTÍCULO 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>

  

ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>LEY 966 DE 2004</p> <p>ARTÍCULO 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA EL SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p> <p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO PÚBLICO PARA EL SEGUNDO DEBATE AL TRIBUNAL ACUSATORIO-COMPARADO TABLA AL TEXTO DE 2015 CÁMARA</p> <p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>
<p>LEY 966 DE 2004</p> <p>ARTÍCULO 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>
<p>LEY 966 DE 2004</p> <p>ARTÍCULO 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>	<p>Artículo 471. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con el procedimiento...</p>









LEY 996 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES</p> <p>ARTÍCULO 104. Modifíquese el artículo 527 de la Ley 996 de 2004...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527A. Indemnización integral en los delitos que admiten querrela, en los delitos que admiten querrela, en los delitos que admiten querrela, cuando no concurre alguna de las circunstancias de agravación penales en los delitos de agresión puntual en los delitos de agresión puntual...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527A. Indemnización integral en los delitos que admiten querrela, en los delitos que admiten querrela, cuando no concurre alguna de las circunstancias de agravación penales en los delitos de agresión puntual en los delitos de agresión puntual...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>Observaciones Ministerio Público</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p>
LEY 996 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES</p> <p>ARTÍCULO 104. Modifíquese el artículo 527 de la Ley 996 de 2004...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527A. Indemnización integral en los delitos que admiten querrela, en los delitos que admiten querrela, cuando no concurre alguna de las circunstancias de agravación penales en los delitos de agresión puntual en los delitos de agresión puntual...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527A. Indemnización integral en los delitos que admiten querrela, en los delitos que admiten querrela, cuando no concurre alguna de las circunstancias de agravación penales en los delitos de agresión puntual en los delitos de agresión puntual...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>Observaciones Ministerio Público</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p>
LEY 996 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PÚBLICO
<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES</p> <p>ARTÍCULO 104. Modifíquese el artículo 527 de la Ley 996 de 2004...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527A. Indemnización integral en los delitos que admiten querrela, en los delitos que admiten querrela, cuando no concurre alguna de las circunstancias de agravación penales en los delitos de agresión puntual en los delitos de agresión puntual...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p> <p>ARTÍCULO 527A. Indemnización integral en los delitos que admiten querrela, en los delitos que admiten querrela, cuando no concurre alguna de las circunstancias de agravación penales en los delitos de agresión puntual en los delitos de agresión puntual...</p> <p>ARTÍCULO 527. DIRECTRICES. El Fiscal General de la Nación elaborará el manual que fija las directrices del procedimiento...</p> <p>ARTÍCULO 105. Adiciónese al Libro IV de la Ley 996 de 2004 un Capítulo II, denominado "Indemnización integral de la víctima"</p>	<p>Observaciones Ministerio Público</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p> <p>PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DEL TEXTO DE LEY NÚMERO 21 PARA SEGUNDO DEBATE AL TÍTULO I DE 2015 CÁMARA</p>







LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE PARA EL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE PARA EL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE PARA EL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
	<p>2. La aplicación, en los delitos acotados concretamente, de los mecanismos preventivos contemplados en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004 con respecto a las Fiscalías y el Individuo, investigado o acusado, en el caso de que el sujeto pasivo de los delitos contemplados en el Libro IV, Título I, como también lo consagra el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, sea un menor de edad, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando esta figura se encuentre contemplada en el Código de Procedimiento Penal y requiera establecimiento para el menor de edad en este Código.</p>	<p>2. La aplicación, en los delitos acotados concretamente, de los mecanismos preventivos contemplados en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004 con respecto a las Fiscalías y el Individuo, investigado o acusado, en el caso de que el sujeto pasivo de los delitos contemplados en el Libro IV, Título I, como también lo consagra el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, sea un menor de edad, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando esta figura se encuentre contemplada en el Código de Procedimiento Penal y requiera establecimiento para el menor de edad en este Código.</p>	<p>Nuevo.</p>
	<p>3. La individualización de todos los miembros que se van a someter a la justicia se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 377.</p>	<p>3. La individualización de todos los miembros que se van a someter a la justicia se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 377.</p>	<p>Nuevo.</p>
	<p>4. Información concorde a la identificación de los miembros de la organización, que se han acogido voluntariamente por los miembros de la organización.</p>	<p>4. Información concorde a la identificación de los miembros de la organización, que se han acogido voluntariamente por los miembros de la organización.</p>	<p>Nuevo.</p>
	<p>5. Las condiciones de tiempo, modo y lugar de la intervención de los miembros de la organización según lo establecido en el artículo 377.</p>	<p>5. Las condiciones de tiempo, modo y lugar de la intervención de los miembros de la organización según lo establecido en el artículo 377.</p>	<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>

LEY 906 DE 2004	ANTERIOR ARTICULADO (ESTUDIO)	NUEVO ARTICULADO (ESTUDIO)	OBSERVACIONES MINISTERIO PUBLICO
	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE PARA EL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE PARA EL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>	<p>PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2015 PARA SEGUNDO DEBATE AL COMITÉ ASISTENTE PARA EL ACUSADOR-COMPARADO TABLA</p>
	<p>responsabilidad penal por razón de su intervención en los delitos-4.</p>	<p>responsabilidad penal por razón de su intervención en los delitos.</p>	<p>responsabilidad penal por razón de su intervención en los delitos.</p>
	<p>Artículo 217. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 375, así:</p>	<p>Artículo 203. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 375, así:</p>	<p>Artículo 203. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 375, así:</p>
	<p>Los delitos contemplados en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando el sujeto pasivo de los delitos contemplados en el Libro IV, Título I, como también lo consagra el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, sea un menor de edad, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando esta figura se encuentre contemplada en el Código de Procedimiento Penal y requiera establecimiento para el menor de edad en este Código.</p>	<p>Los delitos contemplados en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando el sujeto pasivo de los delitos contemplados en el Libro IV, Título I, como también lo consagra el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, sea un menor de edad, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando esta figura se encuentre contemplada en el Código de Procedimiento Penal y requiera establecimiento para el menor de edad en este Código.</p>	<p>Los delitos contemplados en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando el sujeto pasivo de los delitos contemplados en el Libro IV, Título I, como también lo consagra el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, sea un menor de edad, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, cuando esta figura se encuentre contemplada en el Código de Procedimiento Penal y requiera establecimiento para el menor de edad en este Código.</p>
	<p>La información concorde a la identificación de los miembros de la organización, que se han acogido voluntariamente por los miembros de la organización.</p>	<p>La información concorde a la identificación de los miembros de la organización, que se han acogido voluntariamente por los miembros de la organización.</p>	<p>La información concorde a la identificación de los miembros de la organización, que se han acogido voluntariamente por los miembros de la organización.</p>
	<p>Las condiciones de tiempo, modo y lugar de la intervención de los miembros de la organización según lo establecido en el artículo 377.</p>	<p>Las condiciones de tiempo, modo y lugar de la intervención de los miembros de la organización según lo establecido en el artículo 377.</p>	<p>Las condiciones de tiempo, modo y lugar de la intervención de los miembros de la organización según lo establecido en el artículo 377.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>
			<p>Nuevo.</p>





